

Santiago, trece de mayo de dos mil veinticinco.

**Vistos:**

En estos autos, en Rol N° C-2216-2022 del Primer Juzgado Civil de Santiago, en procedimiento ordinario de indemnización de perjuicios, por sentencia de treinta de noviembre de dos mil veintidós, se hizo lugar a la demanda de indemnización de perjuicios por daño moral, deducida por **Francisco Antonio Fuentes Barros** contra el Fisco de Chile, condenando a este último a pagar a título de daño moral, en favor del actor, la suma de \$100.000.000.- (cien millones de pesos).

Impugnada esa decisión, la Corte de Apelaciones de Santiago, por sentencia de catorce de abril de dos mil veintitrés en Rol 18955-2022, la revocó en la parte que condenó en costas a la demandada y confirmó en lo demás apelado, con declaración que rebaja el monto de la indemnización a pagar a **Francisco Antonio Fuentes Barros** a la suma de \$20.000.000 (veinte millones de pesos) y que dicha suma deberá reajustarse de acuerdo a la variación del índice de precios al consumidor entre la fecha en que esta sentencia quede ejecutoriada y la de su pago efectivo y en cuanto a los intereses, dicha suma solo generará los intereses corrientes para operaciones reajustables desde que el demandando se constituya en mora.

Contra esa sentencia, la demandante dedujo recurso de casación en el fondo, el que se ordenó traer en relación.

**Considerando:**

**PRIMERO:** Que, en cuanto al recurso de casación en el fondo, el recurrente denuncia como error de los sentenciadores el infringir las normas reguladoras de la prueba, refiriendo que ello emana de la vulneración de los artículos 19, 20, 21, 22, 23 y 24 del Código Civil, en relación con los artículos 1698, 1712, 2314 y 2329 del mismo código.

Plantea que la rebaja del monto de la indemnización de perjuicios resulta errada, desde que, conforme al artículo 1698 referido, no se puede exigir que se



prueben hechos públicos y notorios, como lo son las repercusiones del daño sufrido por un ser humano que fue sometido a crímenes de lesa humanidad, como detención ilegal y arbitraria, torturas físicas y psicológicas, tratos crueles inhumanos y degradantes, persecución y prisión política. Sin perjuicio de lo anterior, alega que con la prueba rendida se reúnen los requisitos para presumir los daños sufridos, conforme al artículo 1712 del Código Civil, los que incluso no fueron negados por el demandado, haciendo presente, por último, que una de las pruebas incorporadas, el informe psicológico realizado a la víctima, no fue valorado adecuadamente por los sentenciadores.

Con base en lo expuesto, pide se anule el fallo recurrido y, acto seguido, pero en forma separada, proceda a dictar la correspondiente sentencia de reemplazo que corresponda con arreglo a la ley y que —en definitiva— confirme con declaración la sentencia definitiva primera instancia, con costas.

**SEGUNDO:** Que, como se desprende de autos, son hechos indiscutidos, asentados en el fallo de primera instancia en su razonamiento décimo cuarto y confirmado por la Corte de Apelaciones de Santiago, los siguientes: *“...Como ya se encuentra acreditado, y sin ánimo de agotar el asunto, el actor detenta, la condición de “Preso Político y Torturado”, detención que es del todo plausible sostener, se debió al hecho de ser dirigente estudiantil y militante de las Juventudes Comunistas.*

*Siendo tales circunstancias aquellas que motivaron la detención y posterior tortura, física y psicológica...”*

**TERCERO:** Que, sobre la base de los presupuestos consignados precedentemente la Corte de Apelaciones de Santiago, confirmo con declaración la sentencia de primer grado, argumentando en su razonamiento:

*“1º) Que en la especie se trata de una víctima que estuvo privado de libertad por algunos días en la localidad de Linares, sufriendo maltrato físico y psicológico.*



*2º) Que dentro de la perspectiva anterior, las repercusiones que estos hechos causan al afectado deben ser ponderados a la luz de la prueba acompañada, toda vez que la reparación por el sufrimiento moral que aquello produjo debe ser regulada conforme al mérito de las probanzas aparejadas.*

*3º) Que en este punto el único medio probatorio relacionado directamente con el demandante para justificar el daño moral que la víctima soportó es un documento privado de la Psicóloga Carolina Canales Cortes; dicho informe no fue ratificado en juicio, por lo que su mérito probatorio no cumple con lo dispuesto en el artículo 1702 del Código Civil, en consecuencia por sí solo no constituye plena prueba, sino a lo más base de una presunción, por lo que esta Corte estima prudente rebajar la suma indemnizatoria regulada.*

**CUARTO:** Que, conforme a la transcripción del fallo reclamado y al haber confirmado el de primera instancia, se advierte que se tuvo por acreditada la existencia de daño padecido por el demandante y que existe un deber de reparación a su respecto.

Luego, cuestión diversa es la evaluación del daño reclamado y para lo cual, es conveniente tener en cuenta que el daño moral consiste en la lesión o agravio, efectuado culpable o dolosamente, a un derecho subjetivo de carácter inmaterial e inherente a la persona y que es imputable a otro. Esta particularidad hace que no puedan aplicarse al momento de precisar su existencia y entidad, las mismas reglas utilizadas para la determinación de daños materiales, pues en tal evento se trata de una alteración externa y fácilmente perceptible, lo que no acontece en el plano subjetivo. Como lo ha señalado anteriormente esta Corte, entre otros, en el pronunciamiento Rol N° 17.842-2019, de fecha 11 de octubre de 2019, el menoscabo moral, por su índole netamente subjetiva y porque su fundamento arranca de la propia naturaleza afectiva del ser humano, no es, sin duda, de orden puramente económico y no implica, en consecuencia, un deterioro real en el patrimonio de quien lo sufre, por lo que queda enteramente entregado a la regulación prudencial de los jueces de instancia, tomando en consideración



aspectos como las circunstancias en que se produjo y todas aquellas que influyeron en la intensidad del dolor y sufrimiento experimentado, cuestiones que necesariamente se extraen de la probanzas incorporadas al proceso, ponderación de las mismas que el tribunal explicita fundadamente en su fallo y pese a lo cual, se denuncia en el recurso en análisis la vulneración al artículo 1698 del Código Civil, sin que se logre advertir de qué manera se produjo dicha infracción, pues las argumentaciones contenidas en el libelo impugnatorio, resultan contradictorias entre sí, extrayéndose más bien, que éste plantea únicamente discrepancias en torno a la valoración que el fallo confiere a los elementos de convicción reunidos y relacionados en la sentencia y conforme a los cuales se cuantificó el monto de la indemnización, discordándose entonces, sólo de sus conclusiones, cuestión ajena a este recurso de naturaleza sustantiva.

**QUINTO:** Que, en lo referente al artículo 1712 del Código Civil, su infracción invocada de forma genérica y sin desarrollo, resulta merito suficiente para su desestimación, pese a lo cual debe indicarse, según ya ha tenido oportunidad de indicarlo esta Corte, tal artículo carece del carácter de decisoria litis, pues dicha norma establece diversos extremos para que las presunciones judiciales puedan constituir la prueba completa de un hecho y sobre dichos requisitos, esto es, que las presunciones sean graves; precisas, de tal manera que una misma no pueda conducir a conclusiones diversas; directas, de modo que conduzcan lógica y naturalmente al hecho que de ellas se deduzca; y que las unas concuerden con las otras, de manera que los hechos guarden conexión entre sí, e induzcan todas, sin contraposición alguna, a la misma conclusión de haber existido el hecho de que se trata, no pueden considerarse reglas reguladoras de la prueba, ya que queda entregado a los jueces de la instancia afirmar o negar su cumplimiento como resultado de un ejercicio de ponderación y valoración del conjunto de las presunciones judiciales, cuestión que les es privativa a los sentenciadores del grado, tarea de ponderación de los antecedentes que resultó debidamente explicitada en el fallo reclamado, como ya se dijo, cuestión que sólo



viene a reafirmar la conclusión expuesta previamente acerca del recurso, esto es, que éste se limita a expresar sólo discrepancias con lo resuelto por los sentenciadores, lo que en ningún caso logra configurar la infracción de derecho que se denuncia.

**SEXTO:** Que, respecto de las demás normas que se denuncian infringidas, su invocación genérica efectuada por el impugnante, atenta contra la naturaleza de derecho estricto del recurso, lo que impide a este tribunal concluir, con toda precisión, en qué consistieron los errores de derecho y de qué modo influyeron en lo decisorio.

**SÉPTIMO:** Que, de la manera en que se viene razonando, no se logra establecer la concurrencia de las infracciones que se denuncian, lo que lleva necesariamente en el rechazo del recurso en estudio.

Por estas consideraciones y lo previsto en los artículos 767 del Código de Procedimiento Civil, **se rechaza** el recurso de casación en el fondo, deducido por el abogado Mario Armando Cortez Muñoz, en representación de don **Francisco Antonio Fuentes Barros**, en contra de la sentencia de catorce de abril de dos mil veintitrés, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, Rol 18955-2022, la que en consecuencia no es nula.

Redacción a cargo de la Ministra Sra. María Cristina Gajardo Harboe.

Regístrese y devuélvase.

**Rol N° 80.435-2023.**

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema, integrada por los Ministros Sr. Manuel Valderrama R., Sra. María Cristina Gajardo H., el Ministro Suplente Sr. Roberto Contreras O. y los Abogados Integrantes Sres. Juan Carlos Ferrada B. y Carlos Urquieta S. No firma el Ministro suplente Sr. Contreras, no obstante haber estado en la vista y en el acuerdo del fallo, por haber terminado su periodo de suplencia. Santiago, 13 de mayo de 2025.





En Santiago, a trece de mayo de dos mil veinticinco, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

